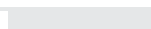


Índice

Presentación	7
Potencialidades de los censos de población y complementariedad con otras fuentes de información para la evaluación de resultados de políticas habitacionales	11
<i>Florencia Molinatti</i>	
Tendencias y proyecciones de la población del área metropolitana del Valle de Aburrá en Colombia, 2010-2030	37
<i>Jorge Enrique Horbath</i>	
Diferenciales en la fecundidad brasileña según la naturaleza de la unión: algunas reflexiones sobre decisiones reproductivas y convivencia	67
<i>Joice Melo Vieira</i>	
Las posibilidades de las fuentes de información sociodemográficas para el monitoreo del derecho a la salud de las personas mayores en la Argentina, 1999-2013	95
<i>María Marta Santillán Pizarro, Bruno Sebastián Ribotta, Laura D. Acosta</i>	
Arreglos familiares de la población latinoamericana en España: ¿cambios en tiempos de crisis?	123
<i>Xiana Bueno, Helga de Valk</i>	
Las consecuencias de quedarse y de volver en el empleo de los uruguayos que migraron a España	149
<i>Victoria Prieto Rosas</i>	
La urbanización en el Brasil, un proceso consolidado y paradójicamente mutable	179
<i>Clovis Ultramari, Olga Lucia C. de Freitas Firkowski, Fernanda Cantarim</i>	
Segregación socioespacial en ciudades mineras: el caso de Antofagasta, Chile	203
<i>Emilio Thodes Miranda</i>	
Cambios y continuidades en la movilidad laboral de la fuerza de trabajo femenina en México	229
<i>Fiorella Mancini</i>	

La nueva geografía de la explotación minero-energética y la acumulación por desposesión en Colombia entre 1997 y 2012	249
<i>Nubia Yaneth Ruiz Ruiz, Luis Daniel Santana Rivas</i>	
Envejecimiento demográfico y cambios en la transición a la vejez en el Brasil: pasado, presente y futuro	279
<i>Carolina A. Guidotti Gonzalez</i>	
La escolaridad, el estrato social y la formación de las primeras uniones en México: una visión de largo plazo	301
<i>Marta Mier y Terán</i>	
Orientaciones para los autores de la revista <i>Notas de Población</i>	329
Publicaciones recientes de la CEPAL.....	335



Presentación

La edición núm. 102 de *Notas de Población* llega a los lectores con un diverso catálogo de temas de suma importancia en el campo de los estudios demográficos y de la población de América Latina y el Caribe. Estos temas, que se analizan a lo largo de los 12 artículos que conforman la presente edición, abarcan resumidamente los censos y las proyecciones de población, el análisis de la fecundidad en relación con las características de las uniones, el derecho a la salud de las personas de edad, el envejecimiento demográfico en el Brasil, las formas de convivencia de los latinoamericanos en España, la migración uruguaya de retorno desde aquel país europeo, el proceso de urbanización en el Brasil, la segregación espacial en ciudades mineras de Chile, la movilidad laboral femenina en México, el impacto de la explotación minero-energética en Colombia, los rostros diversificados del envejecimiento en el Brasil y las interrelaciones entre escolaridad, estrato social y formación de la unión en México.

El primer artículo de esta selección, de Florencia Molinatti, lleva por título “Potencialidades de los censos de población y complementariedad con otras fuentes de información para la evaluación de resultados de políticas habitacionales” y destaca las potencialidades de los relevamientos censales para la formulación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas en materia de hábitat y vivienda. Además, da cuenta de los desafíos metodológicos a enfrentar debido a las limitaciones para la identificación de la población beneficiaria de los programas habitacionales. En este contexto, el trabajo propone una metodología de evaluación de resultados que, a partir de las potencialidades de los censos y su complementariedad con otras fuentes de información, permite estimar los efectos de una política habitacional concreta en la provincia de Córdoba (Argentina) sobre la población beneficiaria.

El artículo de Jorge Horbath, “Tendencias y proyecciones de la población del área metropolitana del Valle de Aburrá en Colombia, 2010-2030”, refiere a los cambios demográficos, económicos y sociales experimentados por el área metropolitana del Valle de Aburrá (Colombia). Con más de 3,5 millones de habitantes distribuidos en 10 municipios que incluyen a Medellín, la capital del departamento de Antioquia, las tendencias por grupos de edad y sexo ponen de manifiesto notorias recuperaciones de la población respecto de un pasado marcado por la violencia y las altas tasas de mortalidad. El trabajo echa luz sobre la desaceleración de los procesos de concentración hacia Medellín que se observa actualmente y la consolidación de nuevos centros de agrupación poblacional en los municipios colindantes, con fenómenos de rururbanización que estarían marcando la tendencia en las siguientes dos décadas.

En el trabajo de Joice Melo Vieira, “Diferenciales en la fecundidad brasileña según la naturaleza de la unión: algunas reflexiones sobre decisiones reproductivas y convivencia”,

se explora la relación entre el comportamiento reproductivo y las características de la nupcialidad en el Brasil, sobre la base de datos de las Encuestas de Demografía y Salud (Demographic and Health Survey (DHS)) de 1986 y 1996 y de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de la Infancia y la Mujer (PNDS) de 2006. El artículo da cuenta de que las mujeres que viven en uniones consensuales presentan un nivel de fecundidad más elevado que aquellas que optan por el matrimonio. También constata un movimiento de convergencia entre los niveles de fecundidad de ambos grupos. En este contexto, la autora consigna que el significado de tener hijos ha sufrido transformaciones y que, en el caso brasileño, las uniones consensuales pueden comprenderse mejor a la luz de la teoría de la institucionalización.

En el artículo de María Marta Santillán, Bruno Ribotta y Laura Acosta, “Las posibilidades de las fuentes de información sociodemográficas para el monitoreo del derecho a la salud de las personas mayores en la Argentina, 1999-2013”, se analiza el alcance, las limitaciones y los desafíos de las fuentes de información oficiales de la Argentina para el monitoreo del ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores en los últimos 15 años. Los autores realizan una compilación de indicadores propuestos principalmente por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y analizan las posibilidades de implementación de dichos indicadores con un enfoque de derechos humanos. Entre las principales conclusiones del trabajo se destaca que si bien la Argentina cuenta con fuentes de información que permiten abordar una cantidad significativa de indicadores, ellas no permiten monitorear diferencias entre distintos grupos socioeconómicos y geográficos ni su evolución para este grupo poblacional, por lo que no es posible el abordaje desde el enfoque de derechos.

A continuación, Xiana Bueno y Helga de Valk abordan el tema de la estructura de los hogares de la población migrante en el artículo “Arreglos familiares de la población latinoamericana en España ¿Cambios en tiempos de crisis?”. Sostienen que dicha estructura a menudo difiere de la que se presenta en el caso de la población no migrante y destacan entre los factores explicativos el papel que juegan las redes sociales en la facilitación del proceso de asentamiento y los vínculos intergeneracionales potencialmente más estrechos en las familias migrantes. Sobre la base de información de la Encuesta de Población Activa (EPA) del período comprendido entre 2005 y 2012, las autoras sugieren la existencia de una pauta de género diferenciada y resaltan la importancia no solo de la coyuntura económica sino también de los eventos en el ciclo de vida a la hora de explicar la probabilidad de vivir en hogares complejos.

También en el ámbito de la migración internacional, en el artículo de Victoria Prieto, “Las consecuencias de quedarse y de volver en el empleo de los uruguayos que migraron a España”, se analiza el acceso al empleo de los emigrados y retornados uruguayos. La autora indaga si la aparente ventaja del retorno, desde un contexto de alto desempleo como el español hacia otro con pleno empleo como el uruguayo, se distribuye de forma homogénea entre los retornados de este origen según sexo, instrucción y duración del asentamiento

tras la migración. Los resultados expuestos en el trabajo corroboran una distribución heterogénea de las ganancias del retorno sobre el acceso al empleo y el sector de inserción, que favorece a los varones con menor nivel de educación y perjudica a las mujeres y a los retornados más instruidos.

Seguidamente, Clovis Ultramari, Olga de Freitas y Fernanda Cantarim incursionan en los temas de urbanización en el artículo “La urbanización en el Brasil, un proceso consolidado y paradójicamente mutable”. Basados en la evidencia de una nueva cuestión urbana como la cuasisustitución del crecimiento demográfico producto de la emigración del campo a la ciudad, los autores postulan que la urbanización en el país sudamericano se caracteriza por la doble condición de estar consolidada y ser, paradójicamente, mutable. El marco temporal de las referencias teóricas utilizado en el trabajo es el período que va entre 1970 y 2010.

El artículo “Segregación socioespacial en ciudades mineras: el caso de Antofagasta, Chile”, de Emilio Thodes, forma parte de una serie de estudios sobre desarrollo urbano en zonas mineras realizados en Australia y Chile. Al tiempo que se da cuenta del impulso a la economía local que ha supuesto la actividad minera en los países del Cono Sur de América Latina, por atraer capital externo y nuevos actores a las zonas donde se concentra la extracción minera, en el trabajo también se analiza el impacto de dicha actividad en la segregación socioespacial, concretamente en la ciudad de Antofagasta, al norte de Chile. Se advierte que este proceso ha promovido modalidades de desarrollo desigual que afectan tanto a las zonas urbanas como a las rurales, a la vez que producen transformaciones socioespaciales y crean barreras físicas y sociales.

Ya en el plano de la movilidad laboral y el género, el trabajo de Fiorella Mancini, “Cambios y continuidades en la movilidad laboral de la fuerza de trabajo femenina en México”, se centra en el análisis de diferentes transiciones laborales de mujeres mexicanas de tres generaciones, desde su primer empleo hasta los 30 años. La finalidad es doble: por una parte, observar procesos de informalización, descalificación, desalarización y tercerización del mercado de trabajo femenino en los últimos años, y, por la otra, analizar en qué medida tales procesos se manifiestan en la movilidad individual de las trayectorias laborales femeninas. En el artículo se pone de relieve que las condiciones de entrada al mercado laboral tienen gran incidencia en las posibilidades futuras de las trayectorias laborales de las mujeres.

El artículo de Nubia Ruiz y Luis Santana, “La nueva geografía de la explotación minero-energética y la acumulación por desposesión en Colombia entre 1997 y 2012”, se centra en el análisis de las relaciones existentes entre el desplazamiento forzado, la entrega de títulos mineros y explotaciones energéticas, y la acumulación de tierras rurales productivas en Colombia entre 1997 y 2012. En la indagación de dichas relaciones, los autores ponen en evidencia la existencia de una nueva geografía humana y la configuración de regiones en las cuales la explotación minero-energética y las condiciones de violencia han reafirmado al país como exportador neto de materias primas. Desde esta perspectiva, ello habría reforzado la transnacionalización de la economía y profundizado las condiciones de inequidad y pobreza.

Más adelante, en el artículo “Envejecimiento demográfico y cambios en la transición a la vejez en el Brasil: pasado, presente y futuro”, Carolina Guidotti describe las características de la transición a la vejez de hombres y mujeres en el Brasil. Para ello, el trabajo se focaliza en tres áreas: la esfera doméstica, las condiciones de salud y la condición de actividad económica. A partir de la perspectiva teórica del curso de vida, plantea la hipótesis de que la heterogeneidad de la población adulta mayor viene aumentando desde las últimas décadas, motivo por el cual se estaría observando una diversificación de las experiencias de envejecimiento. Los resultados del análisis ponen de relieve de qué manera los cambios en el contexto demográfico, político, económico y sociocultural inciden en las formas de envejecer de la población y las modifican.

En el final de la presente edición, el artículo “La escolaridad, el estrato social y la formación de las primeras uniones en México: una visión de largo plazo”, de Marta Mier y Terán, analiza el efecto de los crecientes niveles educativos en los patrones de formación de las primeras uniones en el siglo XX en México. La autora utiliza como fuente de datos la Encuesta Nacional de la Dinámica Familiar (Endifam) de 2005 y emplea modelos de tiempo discreto que involucran regresión logística y de riesgos en competencia. El trabajo resalta entre sus hallazgos que la asistencia a la escuela y la escolaridad propician la postergación de la formación de la primera unión en general, y en particular de las uniones consensuales y de las uniones que permanecen en el hogar familiar, pero a través de vías muy distintas en hombres y mujeres, en las cohortes de nacimiento y en los estratos sociales de origen.

Comité Editorial de *Notas de Población*

La nueva geografía de la explotación minero-energética y la acumulación por desposesión en Colombia entre 1997 y 2012¹

Nubia Yaneth Ruiz Ruiz²
Luis Daniel Santana Rivas³

Recibido: 21/01/2016
Aceptado: 3/03/2016

Resumen

En este artículo se presentan algunos resultados de un trabajo de investigación más amplio, que tiene como objetivo analizar las relaciones existentes entre el desplazamiento forzado, la entrega de títulos mineros y permisos de explotación energética y la acumulación de tierras rurales productivas en Colombia entre los años 1997 y 2012. A partir de un ejercicio exploratorio de análisis espacial en el que se relacionan variables como el desplazamiento forzado, la concesión de títulos mineros y petroleros y el coeficiente de Gini de tierras rurales, se indagó sobre la existencia de una nueva geografía humana que configura regiones en las cuales la explotación minero-energética y las condiciones de violencia han consolidado la posición del país como exportador neto de materias primas, fortaleciendo la transnacionalización de la economía y, de esta manera, profundizando las condiciones de inequidad y pobreza que hacen de Colombia el segundo país más desigual de América Latina.

Palabras clave: Explotación minero-energética, acumulación por desposesión, migración forzada, violencia, minería, reprimarización.

¹ El presente artículo se basa en la investigación “La relación entre el desplazamiento forzado, la minería y las geografías de acumulación por desposesión en los últimos 20 años en Colombia”.

² Psicóloga, Doctora en Demografía, Maestra en Estudios de Población y en Psicología Comunitaria. Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Geografía Humana. Profesora Asociada en dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: nyruizr@unal.edu.co.

³ Geógrafo, Magíster en Geografía y candidato a doctor en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: ldsantana@uc.cl.

Abstract

This article presents some of the results of a broader research work, which analyses the links between forced displacement, the concession of mining rights and permits for energy production, and the accumulation of productive rural lands in Colombia between 1997 and 2012. On the basis of an exploratory spatial analysis relating such variables as forced displacement, the concession of mining and drilling rights and the Gini coefficient in rural areas, we investigate the existence of a new human geography of regions in which mining and energy production and violent conditions have entrenched Colombia's position as a net exporter of raw materials and strengthened the transnationalization of the economy, thus deepening the inequity and poverty that make Colombia the second most unequal country in Latin America.

Keywords: Mining and energy, accumulation by dispossession, forced migration, violence, mining, reprimarization.

Résumé

Cet article présente quelques résultats d'un travail de recherche qui a pour but d'analyser les relations existantes entre le déplacement forcé, la remise de titres miniers et de permis d'exploitation d'énergies et l'accumulation des terres rurales productives en Colombie entre les années 1997 et 2012. À partir d'un exercice d'exploration d'analyse de l'espace, dans lequel entrent en relation des variables telles que le déplacement forcé, la concession de titres miniers et pétroliers et le coefficient de Gini des terres rurales, l'auteur étudie comment l'émergence d'une nouvelle géographie humaine qui détermine l'existence de régions dans lesquelles l'exploitation minière et énergétique et les conditions de violence ont consolidé la position du pays comme exportateur net de matières premières, renforçant la transnationalisation de l'économie, et créant de cette façon des conditions d'inégalité et de pauvreté qui font de la Colombie le second pays le plus inégal d'Amérique latine.

Mots-clés: exploitation minière et énergétique, accumulation par dépossession, migration forcée, violence, exploitation minière, répression.

Llovía oro señorita, todos estábamos muy asustados por la balacera y la totiazón tan verriónada pero eso no importaba, llovía oro y los que podían se metían a coger un poquito, claro, sin que la guerrilla los viera porque los jodía, ellos habían entrado por eso, por el oro; desde siempre ese oro ha sido lo que ha traído a la gente, los ladrones, lo bueno y lo malo a este pueblo. No se le olvide señorita, llovía oro.

Testimonio de un campesino de 92 años en el municipio de Ataco Tolima sobre la primera toma guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999, en la cual hicieron explotar la bóveda de la caja agraria y el oro allí acumulado literalmente voló, por los aires y, como dicen los habitantes de este municipio perdido en las cordilleras de Colombia, “llovió oro”.

Introducción

El modelo neoliberal de desarrollo económico en Colombia se ha caracterizado por un proceso de reprimarización, cuyo elemento central es la concesión de la producción minero-energética a empresas transnacionales con el argumento de “la necesidad de inversión extranjera directa”. Circunstancias como la dedicación de grandes extensiones de territorio a la economía extractiva a partir de la expropiación violenta e ilegal de ocho millones de hectáreas de tierras productivas y la expulsión de más de siete millones de campesinos a las ciudades revelan la manera en que la acumulación por desposesión ha permitido ampliar las fronteras del capitalismo en el país. Esto ha producido paisajes rurales despoblados, en los que la vocación y los usos agrícolas tradicionales de la tierra han sido sustituidos por la agroindustria, los monocultivos para la producción de agrocombustibles o la minería.

Aunque en el estudio de la migración forzada en Colombia generalmente se indican los factores de la guerra como mecanismo causal de los desplazamientos, varias investigaciones recientes también apuntan a estrategias e intereses económicos. El debate sobre el fenómeno del desplazamiento ha pasado de un excesivo énfasis en las cifras de la migración forzada —contraste entre fuentes oficiales y extraoficiales— a la búsqueda de asociaciones entre dicho proceso y la acumulación de capital (Salcedo, 2006; Bello, 2006) y la interpretación de las geografías de la migración por desplazamiento armado (Ruiz, 2013; Ruiz, 2004; Fajardo, 2002).

Con el presente artículo se busca aportar a ese debate para esclarecer los vínculos que existen entre la asignación de títulos mineros y bloques petroleros y el desplazamiento forzado. Por lo tanto, el objetivo es evidenciar la manera en que la ejecución del modelo neoliberal de desarrollo colombiano promovido mediante el Plan Colombia⁴ (aprobado en el mandato de Andrés Pastrana e implementado por el gobierno de Álvaro Uribe) y

⁴ Es una carta de navegación política de recuperación territorial y económica de los espacios periféricos dominados por la insurgencia.

la Locomotora Minera⁵ (promovida por el actual presidente Juan Manuel Santos) se ha expresado espacialmente mediante procesos violentos de desplazamiento forzado y la entrega de títulos mineros y de explotación energética en territorios que se han vaciado a sangre y fuego.

En la primera parte de esta investigación se analiza el discurso oficial sobre la reprimarización de la economía. Posteriormente, se realiza un análisis demográfico del proceso de expulsión poblacional que se relaciona en términos espaciales con la asignación de títulos mineros y petroleros y con las dinámicas de concentración de la propiedad rural entre 1997 y 2012. Por último, se reflexiona sobre las geografías recientes de la acumulación por desposesión en los campos colombianos.

A. El nuevo modelo de desarrollo neoliberal para Colombia

Después de más de 20 años de la implantación del modelo neoliberal en Colombia, sus consecuencias económicas se pueden resumir en tres grandes líneas: la destrucción del aparato productivo del país, el crecimiento desmesurado de la deuda externa nacional y la entrega de los recursos al capital extranjero (Robledo, 2007). La primera se evidencia en el desequilibrio de la balanza comercial, que pasó a ser negativa porque el país se ha transformado en importador neto de productos terminados, ha perdido capacidad en la producción nacional y carece de ventajas competitivas frente a la mayoría de los productos importados que han inundado el mercado interno. Esto ha causado un desastre nacional agropecuario e industrial. La segunda consecuencia se refleja en la evolución de la deuda, que pasó de 16.000 millones de dólares en 1990 a 90.164 millones de dólares en 2014 (Banco de la República, 2014). La tercera, y más contundente de las consecuencias, es la que se presenta de manera palpable en el incremento de la inversión extranjera directa (IED) (véase el gráfico 1).

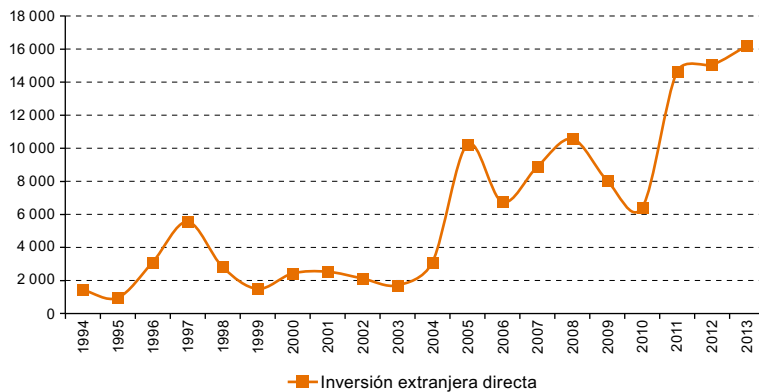
Los capitales que han entrado al país (la IED) en los últimos 20 años presentan una evolución ascendente y, según el Banco de la República, alcanzaron los 15.650 millones de dólares en 2012. Esto representa un crecimiento exponencial del 1.082% con respecto a los niveles de 1994. En el gráfico 1 se observan dicha evolución y su intensificación a partir de 2003, cuando se comienza a implementar y consolidar el Plan Colombia.

Como se puede apreciar en el gráfico 2, la IED derivada de la implementación de las políticas del Plan Colombia y de la Locomotora Minera se ha concentrado en el sector extractivo (petrolero y minero), que ha recibido más del 50% de la inversión desde el año 2003 y ha registrado un crecimiento sostenido que alcanzó niveles superiores al 70% entre 2008 y 2010. Esto ha provocado menor inversión o incluso desinversión en sectores productivos como la agricultura y la caza, la silvicultura y la pesca, las manufacturas, la

⁵ Es un plan que institucionalizó la minería como política nacional prioritaria de desarrollo económico.

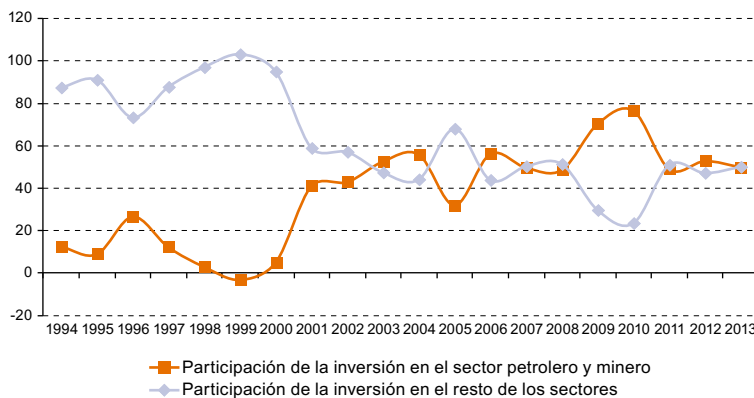
electricidad, el gas y el agua, la construcción, el comercio, los restaurantes y hoteles, los transportes, el almacenamiento y las comunicaciones, así como en los servicios financieros y empresariales.

Gráfico 1
Colombia: evolución de la inversión extranjera directa, 1994-2013
(En millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Boletín Banco de la República [en línea] <http://www.banrep.gov.co/es/inversion-directa> [fecha de consulta: 16 de marzo de 2014].

Gráfico 2
Colombia: evolución de las prioridades de la inversión extranjera, 1994-2012
(En porcentajes)

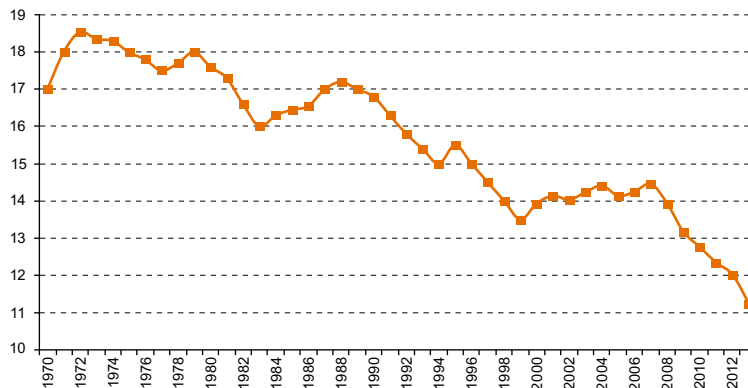


Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Boletín Banco de la República [en línea] <http://www.banrep.gov.co/es/inversion-directa> [fecha de consulta: 16 de marzo de 2014].

De esa manera, las políticas macroeconómicas del país se presentan como estrategias para fortalecer la explotación de materias primas que coadyuvan a desincentivar la producción industrial. Colombia asiste así a un proceso de desindustrialización, entendida como “la pérdida de participación del producto interno bruto (PIB) y el empleo industrial dentro del PIB y el

empleo total” (Martínez y Ocampo, 2011, pág. 57). El país ha perdido de manera sostenida plantas industriales y capacidad productiva en dicho sector (véase el gráfico 3), que registró una media de crecimiento anual negativa del 0,55% entre 1970 y 2012 (Martínez y Ocampo, 2011). Ese proceso comenzó en la década de 1980 mediante la formulación de políticas macroeconómicas neoliberales que buscaban favorecer intereses transnacionales (véase el gráfico 3).

Gráfico 3
Colombia: participación de la industria en la producción total
y participación del PIB industrial en el PIB total
(En porcentajes)



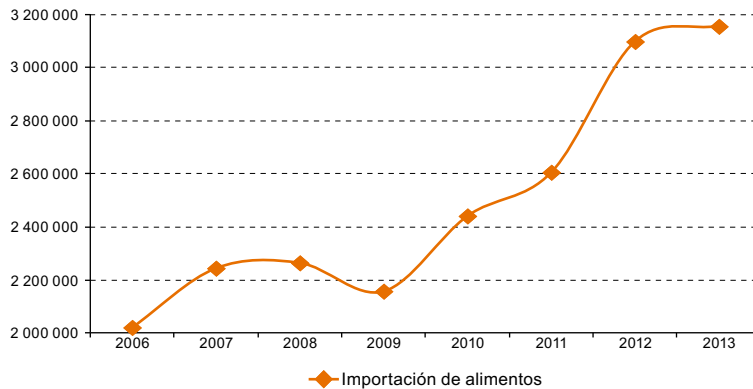
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), series estadísticas, distintas bases.

A este oscuro panorama de la industria colombiana se suma la política de importación de alimentos en el marco de las determinaciones económicas de los tratados de libre comercio (TLC). En el gráfico 4 se muestra con claridad la tendencia creciente al desabastecimiento de alimentos vía la producción interna y la consecuente necesidad de importarlos. El país pasó de importar un total de 2 millones de toneladas métricas de alimentos en 2006 a cerca de 3,2 millones de toneladas métricas en 2013. Esto representa un crecimiento del 60% en la importación de alimentos.

La importación de alimentos, producto de la liberalización comercial y la firma de varios tratados de libre comercio, va de la mano de un acelerado proceso de desruralización, que se expresa no solo en la disminución del PIB de las actividades agrícolas (véase el gráfico 5), sino en la destrucción sistemática de las relaciones sociales y espaciales características de los espacios rurales colombianos. Aunque este fenómeno se observa desde la primera mitad del siglo XX, los últimos 20 años constituyen el período de mayor violencia política y económica, que se ha traducido en el despoblamiento de las zonas rurales del país, mediante la violencia directa sobre la población (desplazamiento y conflicto armado) y la violencia económica (que se cristaliza en el último período con la firma de los tratados de libre comercio). La implementación de esos tratados ha destruido lo poco que quedaba en el campo colombiano: se estima que la extensión de las tierras abandonadas

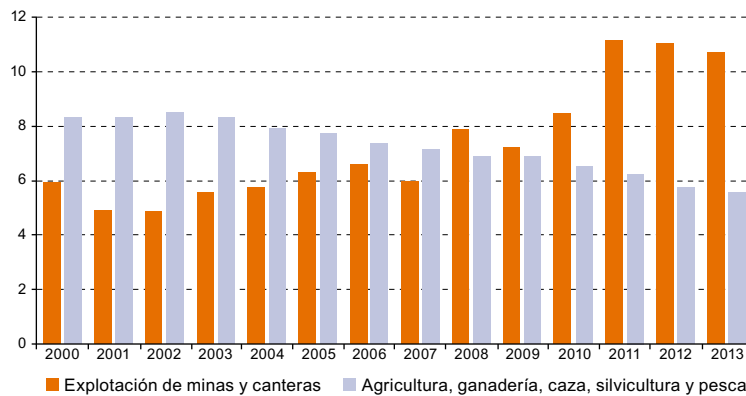
como consecuencia del desplazamiento forzado y la violencia asciende a ocho millones de hectáreas⁶ (González Posso, 2013, pág. 1).

Gráfico 4
Colombia: importación de alimentos, 2006-2013
(En toneladas métricas netas)



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Boletín del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) [en línea] <http://www.dane.gov.co/es/boletin> [fecha de consulta: 16 de marzo de 2015].

Gráfico 5
Colombia: evolución de la participación porcentual de las actividades agrícolas
en el PIB con respecto a la minería, 2000-2013
(En porcentajes)

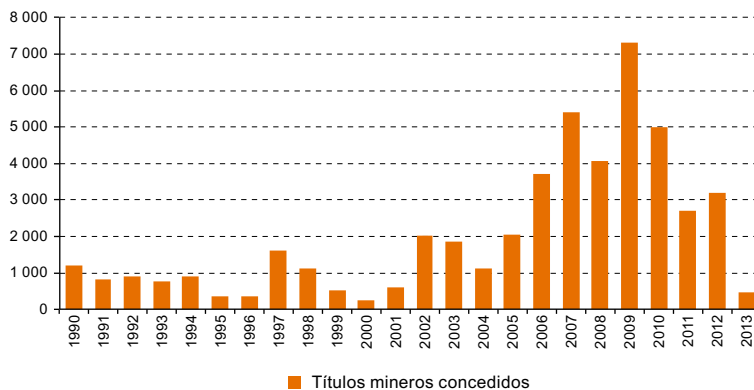


Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Banco de la República [en línea] <http://www.banrep.gov.co/es/pib> [fecha de consulta: 27 de febrero de 2015].

⁶ En el consolidado con corte al 20 de diciembre de 2010, el Programa de Protección de Tierras y Patrimonio (PPTP) informa que cuenta con registros detallados desde 2004 a 2010, que se conocen como Registro Único de Población Desplazada (RUPD) y Registro Único de Protección de Tierras Abandonadas (RUPTA), y formularios que permiten extraer información para el período 1995-2004. La depuración de los datos les permite afirmar que han identificado ya 270.680 predios que suman 6.556.978 hectáreas, a los cuales se pueden sumar otras 1,5 millones de hectáreas que se soportan en los formularios anteriores a 2004. Esas dos cifras llevan a un total de 8.056.978 hectáreas abandonadas por desplazamiento forzado, según los registros oficiales de los últimos 15 años. Son cerca de 280.000 predios que equivalen al 10% del total de predios que conforman la base catastral del país.

Como política de Estado, la entrega de territorios a capitales transnacionales ha evolucionado desde los gobiernos de César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998), durante los cuales se concedieron 1.700 títulos mineros, hasta los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), en los cuales se entregaron 7.800, sumando más de 15.000 títulos en los últimos años (véase el gráfico 6). El incremento en la exportación de minerales es evidente: mientras que las exportaciones de oro pasaron de 19 toneladas en 1998 a 47,8 toneladas en 2009, el volumen de carbón exportado aumentó de 38 kilotoneladas en 2000 a 72 kilotoneladas en 2009 (Toro, 2013). Ya durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos, el Plan Nacional de Desarrollo incluyó, dentro del esquema de inversiones 2010-2014, 15,50 billones de pesos para el sector agrícola y 102,75 billones de pesos para el sector de minas y energía, evidenciando la enorme brecha que se traza entre la producción de alimentos y la economía extractiva.

Gráfico 6
Colombia: evolución de la entrega de títulos mineros, 1990-2013
(En número de títulos)



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Ahora bien, del total de títulos entregados entre 2002 y 2013, período en el que se concentró el mayor número de entregas y concesiones, el 65% corresponde a empresas extranjeras, el 23% a la industria nacional y el 12% restante a personas naturales o comunidades⁷. Esta estimación se basa en el número de títulos y su extensión. De esta manera se evidencia que las empresas extranjeras y las transnacionales han monopolizado las grandes explotaciones mineras en el país. La explotación minera a gran escala ha tomado el territorio nacional.

A diferencia de los títulos mineros (véase el gráfico 6), la concesión de bloques de explotación petrolífera cobró aún más impulso desde la implementación del Plan Colombia

⁷ Cifras obtenidas mediante el análisis de la base de datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Colombia [fecha de consulta: 16 de junio de 2014].

en 2001, alcanzó el auge en el año 2009 —cuando se otorgaron más de 7.000 concesiones— y luego disminuyó drásticamente junto con los precios internacionales del petróleo.

Las concesiones para la extracción de minerales y petróleo han ido a la par de la expulsión de más de siete millones de personas de sus tierras en los campos colombianos. El indicador de concentración de tierras en el período 1995-2010 llegó a ser el más alto del mundo: el coeficiente de Gini era 0,8479 (Rodríguez y Cepeda, 2011, pág. 40) para el conjunto del país, aunque en ciertas regiones superaba el 0,9, como en el caso de Córdoba y de algunas otras zonas de la costa del Caribe. Esto ocurrió porque el Estado y otros agentes sociales, tales como empresarios nacionales, terratenientes y capitalistas nacionales y extranjeros (algunos de ellos tradicionalmente excluidos de las dinámicas del capitalismo nacional⁸), obtuvieron el control territorial mediante estrategias de expropiación, desplazamiento forzado, constitución de ejércitos privados o grupos paramilitares, financiados con dinero del narcotráfico o de las mismas multinacionales que hoy enfrentan procesos por estos hechos (Drummond, BP, Oxi, entre otras). Esto prueba la aplicación en Colombia de lo que Harvey (2006) define como acumulación por desposesión: la captura de valores de uso que sin ser producto de las relaciones sociales capitalistas pueden ponerse a circular dentro del sistema mediante su mercantilización.

B. La acumulación de tierras en Colombia

Antes de establecer las relaciones espaciales entre el desplazamiento forzado y la concesión de bloques y títulos mineros, es necesario contextualizar el panorama de la propiedad de la tierra en Colombia. La estructura socioespacial de propiedad de la tierra en el país data de los tiempos de la colonia y las primeras décadas de vida republicana. Entre el siglo XIX y comienzos del XX, tiene lugar una lucha intensa entre las élites terratenientes ligadas al poder de la Iglesia y las élites urbanas menos retardatarias, que veían la dinámica económica de las excolonias inglesas como un ejemplo a seguir, con el propósito de incorporar a Colombia al comercio internacional como exportador de productos agrícolas, y cuestionaban el interés de las primeras en mantener la dinámica extractiva:

“Las luchas del siglo XIX en Colombia y en casi toda la América hispana fueron un reflejo de los intereses de los criollos que pretendían avanzar en dirección de la libertad económica y política, separar a la Iglesia del Estado y establecer el federalismo contra los que se empeñaban en defender el legado político y religioso hispánico y su tradición de centralismo político” (Kalmanovitz, 2008, pág. 227).

⁸ Algunos de ellos controlados por las guerrillas. Incluso en algunas zonas de colonización agraria la guerrilla ha desempeñado el papel del Estado. El conflicto de las dos últimas décadas ha estado ligado a la recuperación de las regiones periféricas por parte del Estado: la costa del Pacífico, parte de la Amazonia, la Orinoquía y algunas áreas de la costa atlántica.

Colombia experimentó un incipiente proceso de inclusión en la economía internacional a finales del siglo XIX, conocido como “modelo de economía agroexportadora”. El primer gran producto agrícola de exportación internacional fue el tabaco, cuya producción llegó a su auge hacia 1860, junto a otros menos relevantes en ese período, tales como el añil, la quina y el café. Alrededor de 1890 comenzó el denominado ciclo del café, concentrado en esa época en la cordillera oriental, principalmente en los departamentos de Cundinamarca y Santander.

El desarrollo del modelo agroexportador generó dos condiciones que aún se observan en la dinámica rural en Colombia: la ampliación de la frontera agrícola y la acumulación de las mejores tierras por parte de los terratenientes y las élites políticas del momento. Este modelo, ligado fundamentalmente a la disposición y el uso de la tierra productiva, se configuró como uno de los puntos que dieron origen a los conflictos nunca resueltos sobre la propiedad de la tierra, contradicción que según algunos analistas está en la raíz de los conflictos contemporáneos en el país (Fajardo, 2002).

La tierra fue en esa época, y continúa siendo hasta hoy, un elemento de disputa y una herramienta para el ejercicio del poder. Desde siempre forma parte de los trofeos de quien gana la guerra, como indica esta cita sobre la guerra de independencia:

“Hubo además cambios importantes en la distribución de la propiedad agraria debido a la confiscación de las tierras de los realistas y, luego, al reparto de tierras entre las tropas de los ejércitos libertadores. Los soldados recibieron vales para ser cambiados por tierras, pero los caudillos y altos oficiales se los compraban por una fracción de su valor” (Kalmanovitz, 2008, pág. 215).

Es de esta manera que el proceso de concentración de la tierra en Colombia y su historia como elemento de propiedad simbolizan el poder y su ejercicio sobre un territorio, así como sobre los recursos y personas que allí se encuentran.

La actividad extractiva de la minería y la explotación de hidrocarburos está ligada directamente al uso de la tierra, a la posesión y el control de los territorios. Por esta razón era importante desde inicios de la década de 1990 continuar con la tarea de despoblar el campo: no solo había que sacar a los indígenas de las grandes extensiones de tierra con inmensas riquezas mineras que poseen en propiedad colectiva, sino también a los campesinos que poseían suelos ricos en recursos mineros.

Los datos aportados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) acerca del proceso de acumulación de tierras en Colombia ayudan a comprender la situación actual del país. La exhaustiva investigación del IGAC muestra el proceso gradual de acumulación y la desigualdad en la distribución como hechos evidentes desde mediados del siglo XX (IGAC/CORPOICA, 2002) (véase el cuadro 1).

Cuadro 1
Colombia: evolución de la propiedad de tierras rurales, 1960-2002
(En miles de hectáreas, miles de propietarios y porcentajes)

Año	1960				1970				1984				1997				2002			
	Hectáreas	Propietarios	Hectáreas	Propietarios	Hectáreas	Propietarios	Hectáreas	Propietarios	Hectáreas	Propietarios	Hectáreas	Propietarios	Hectáreas	Propietarios	Hectáreas	Propietarios	Hectáreas	Propietarios		
Menos de 5	955,8	737,3	868,7	678,5	1 147,1	987,9	1 447,1	1 391,9	1 447,1	1 391,9	1 447,1	1 391,9	2 189,4	2 333,0	2 189,4	2 333,0	2 189,4	2 333,0		
Entre 5 y 20	1 885,9	255,4	1 835,3	219,3	2 558,5	336,8	3 232,8	444,5	3 232,8	444,5	3 232,8	444,5	4 480,2	651,3	4 480,2	651,3	4 480,2	651,3		
Entre 20 y 50	1 957,1	74,6	2 213,8	84,2	3 193,1	136,0	3 810,4	170,9	3 810,4	170,9	3 810,4	170,9	5 623,1	254,3	5 623,1	254,3	5 623,1	254,3		
Entre 50 y 200	3 815,5	52,3	4 363,2	60,2	6 430,3	96,6	6 758,9	117,3	6 758,9	117,3	6 758,9	117,3	10 360,5	170,2	10 360,5	170,2	10 360,5	170,2		
Entre 200 y 500	2 674,8	11,5	3 036,4	13,2	3 714,3	19,0	3 329,5	19,1	3 329,5	19,1	3 329,5	19,1	5 289,2	30,8	5 289,2	30,8	5 289,2	30,8		
Más de 500	4 606,4	4,8	5 054,7	5,4	5 189,7	6,7	6 408,6	5,7	6 408,6	5,7	6 408,6	5,7	24 254,1	13,9	24 254,1	13,9	24 254,1	13,9		
Total	15 895,5	1 135,9	17 372,1	1 060,8	22 233,0	1 583,0	24 987,3	2 149,4	24 987,3	2 149,4	24 987,3	2 149,4	52 196,5	3 453,5	52 196,5	3 453,5	52 196,5	3 453,5		
Porcentajes																				
Menos de 5	6,0	64,9	5,0	64,0	5,2	62,4	5,8	64,8	5,8	64,8	5,8	64,8	4,2	67,6	4,2	67,6	4,2	67,6		
Entre 5 y 20	11,9	22,5	10,6	20,7	11,5	21,3	12,9	20,7	12,9	20,7	12,9	20,7	8,6	18,9	8,6	18,9	8,6	18,9		
Entre 20 y 50	12,3	6,6	12,7	7,9	14,4	8,6	15,2	8,0	15,2	8,0	15,2	8,0	10,8	7,4	10,8	7,4	10,8	7,4		
Entre 50 y 200	24,0	4,6	25,1	5,7	28,9	6,1	27,0	5,5	27,0	5,5	27,0	5,5	19,8	4,9	19,8	4,9	19,8	4,9		
Entre 200 y 500	16,8	1,0	17,5	1,2	16,7	1,2	13,3	0,9	13,3	0,9	13,3	0,9	10,1	0,9	10,1	0,9	10,1	0,9		
Más de 500	29,0	0,4	29,1	0,5	23,3	0,4	25,6	0,3	25,6	0,3	25,6	0,3	46,5	0,4	46,5	0,4	46,5	0,4		
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2012.

Es muy interesante observar que los porcentajes se mantienen relativamente equilibrados durante los cinco años de corte. Aunque de 1960 a 1997 se registran solamente pequeñas variaciones, en 2002, los predios de más de 500.000 hectáreas pasaron de representar entre el 23% y el 29% del total de la tierra al 46,5%. Este aumento se dio a expensas de los demás tamaños, que, sin excepción alguna, perdieron representación entre 1997 y 2002. El porcentaje de propietarios de los predios más grandes no se modificó a lo largo del período estudiado. Esto es una evidencia contundente de la exacerbación del proceso de acumulación entre 1997 y 2002, un período caracterizado por la gran violencia y el desplazamiento de la población rural.

En el gráfico 7 se puede apreciar la extrema desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra, producto de los procesos geohistóricos ya mencionados: el 67,6% de los propietarios posee solamente el 4,2% de la tierra, es decir, 2.189.400 hectáreas en manos de 2.333.000 propietarios, mientras que el 0,4% posee el 46,5% de la tierra, que equivale a decir que 24.254.100 hectáreas están en manos de 13.900 propietarios. No se puede analizar el desplazamiento como una consecuencia o un efecto colateral de las acciones de los actores armados: no es un “efecto” del conflicto sino un arma de guerra y una estrategia de acumulación económica (Molano, 1996).

Gráfico 7
Colombia: distribución de la tierra rural entre 1960 y 2002
(En porcentajes)

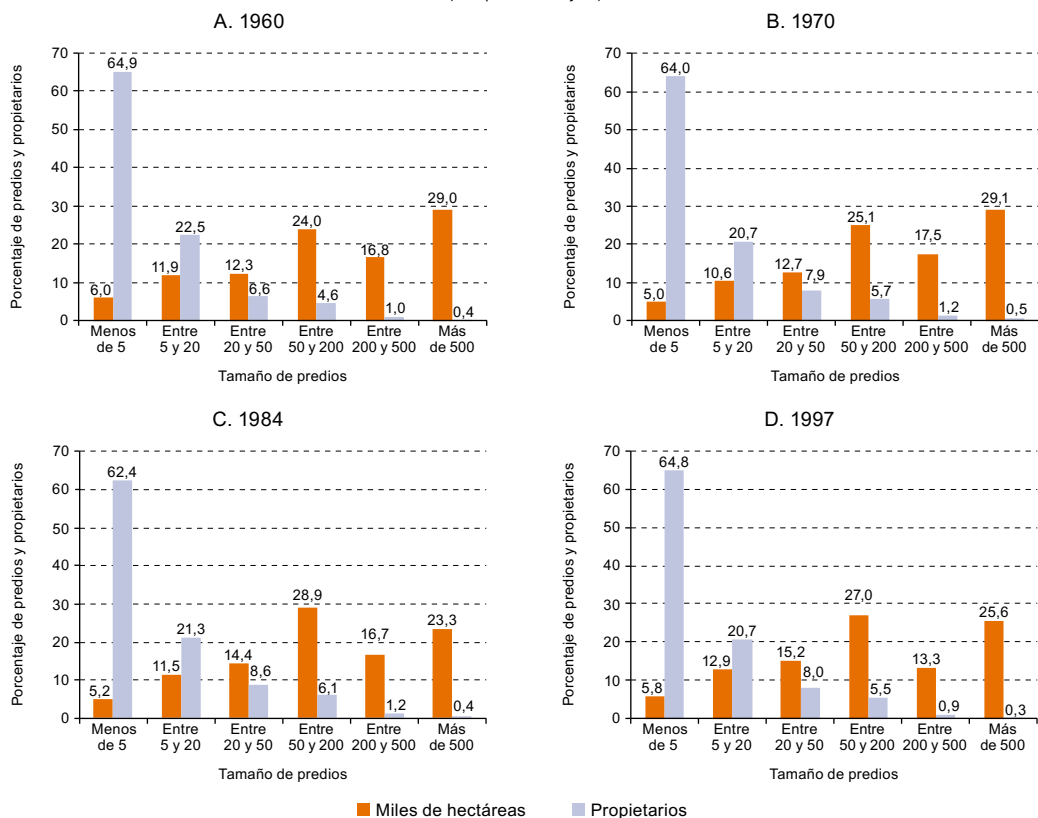
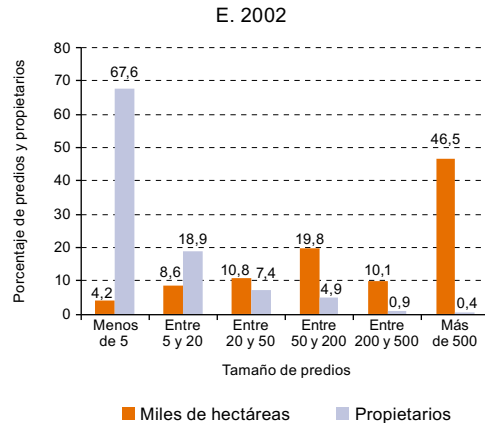


Gráfico 7 (conclusión)



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2012.

C. El desplazamiento forzado como estrategia para la acumulación por desposesión

Comprender la acumulación por desposesión como una forma de acrecentar la ganancia ampliando los espacios del capital (Lefevre, 1976; Harvey, 2012) permite entender el desplazamiento forzado de millones de campesinos colombianos, a los que se expropiaron las tierras hoy destinadas a grandes proyectos mineros o agrícolas de monocultivos, que aplastan la pequeña producción alimentaria del campesino y lo obligan a ser un obrero agrícola —lo proletarianizan— o un desplazado en las grandes ciudades.

“El “ajuste” espacio-temporal, por otra parte, es una metáfora de las soluciones a las crisis capitalistas a través del aplazamiento temporal y la expansión geográfica. La producción del espacio, la organización de nuevas divisiones territoriales de trabajo, la apertura de nuevos y más baratos complejos de recursos, de nuevos espacios dinámicos de acumulación de capital y de penetración de relaciones sociales y arreglos institucionales capitalistas (reglas contractuales y esquemas de propiedad privada) en formaciones sociales preexistentes brindan diversos modos de absorber los excedentes de capital y trabajo existentes. Sin embargo, estas expansiones, reorganizaciones y reconstrucciones geográficas a menudo amenazan los valores fijados en un sitio que aún no han sido realizados” (Harvey, 2006, pág. 102).

Así, la presencia de las grandes empresas multinacionales explotadoras de materias primas son una de las estrategias de expansión geográfica en busca de nuevos recursos naturales, humanos y territoriales, que permitan solventar las crisis de sobreacumulación y obtener elementos necesarios para la producción industrial, principalmente minerales exóticos requeridos hoy por la industria tecnológica.

En el caso colombiano, las fuerzas violentas que empujan a la población a abandonar su territorio, a migrar de manera forzada, son aquellas ligadas a los intereses económicos. Es por ello que las zonas de mayor desplazamiento forzado son los territorios con mayores reservas de recursos naturales y energéticos. En ese sentido:

“el análisis cuantitativo y geográfico permitió reconocer las regiones de mayor expulsión; diez zonas se identificaron como tales: Urabá, Magdalena Medio, Zona Bananera, frontera con Ecuador, Los Montes de María, frontera con Venezuela, región Andina, piedemonte llanero, Pacífico central y Pacífico sur. Las mencionadas zonas expulsoras se caracterizan por tener en su territorio recursos naturales, ser regiones de explotación agroindustrial, encontrarse ubicadas en espacios estratégicos del territorio nacional, como son el centro del país, los golfos y las zonas de frontera. No son los territorios más pobres los de nivel de expulsión, sin embargo, sí es la población más vulnerable la que se ve obligada a salir” (Ruiz, 2013, pág. 331).

El desplazamiento durante las dos últimas décadas de más de seis millones de personas, en un 90% procedentes de zonas rurales, hace que los grupos víctimas de la acumulación por desposesión se caractericen por altos niveles de pobreza y vulnerabilidad social, debido al desarraigo y despojo de su tierra, así como a la pérdida de sus familiares. Por ello:

“El desplazamiento forzado como movimiento migratorio está determinado por las fuerzas de expulsión, es decir, las fuerzas que obligan a migrar están en el lugar de origen y no en los posibles atractivos que ofrecen los sitios de llegada. El carácter forzado de la movilidad poblacional le da una connotación particular frente a otro tipo de migración; es una migración no voluntaria, no determinada por la oferta de mejores condiciones laborales o sociales, es un desplazamiento forzado por las condiciones de violencia que se desarrollan en el territorio donde se habita permanentemente” (Ruiz, 2013, pág. 47).

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2012 existían en Colombia 5.056.128⁹ registros de personas que habían sido obligadas a salir de su territorio habitual de vivienda en los 1.114 municipios del país. Aunque es una cifra muy elevada, que hace de Colombia el segundo país de mayor desplazamiento interno en el mundo, no muestra en su totalidad la magnitud de la crisis humanitaria pues se trata de un dato aproximado. Nunca en la historia del país se logrará saber cuántas personas fueron en realidad víctimas de esta forma de violencia, cuyos objetivos son el despoblamiento de amplias zonas rurales, la apropiación de inmensos territorios productivos, el control de espacios geoestratégicos y la transformación de las relaciones de producción en una amplia zona de la geografía nacional.

⁹ Datos de desplazamiento forzado del Sistema de Información sobre Población Desplazada por la Violencia en Colombia (2012).

Se presentan a continuación los mapas correspondientes a las tasas de desplazamiento forzado durante 15 años en Colombia, analizadas por cortes de cuatro años. En los planos se observa con claridad el avance el fenómeno y su extensión en el territorio nacional (véase el mapa 1).

Entre 1997 y 2012 el proceso de desplazamiento dejó un saldo de más de cinco millones de personas obligadas a abandonar su espacio de vida, su territorio, y refugiarse en las grandes y medianas ciudades del país para tratar de reconstruir su vida. Las tasas de expulsión ratifican la teoría de que el desplazamiento abarca la totalidad del país y que dicho fenómeno se concentra en territorios poseedores de grandes riquezas naturales, sitios geoestratégicos y territorios de frontera. Los mapas del desplazamiento muestran esta condición (véase el mapa 1), dejando entrever también la progresividad del fenómeno. El período estudiado se dividió en cuatrienios para poder observar con claridad la forma en que el desplazamiento afectó de manera reiterada territorios estratégicos.

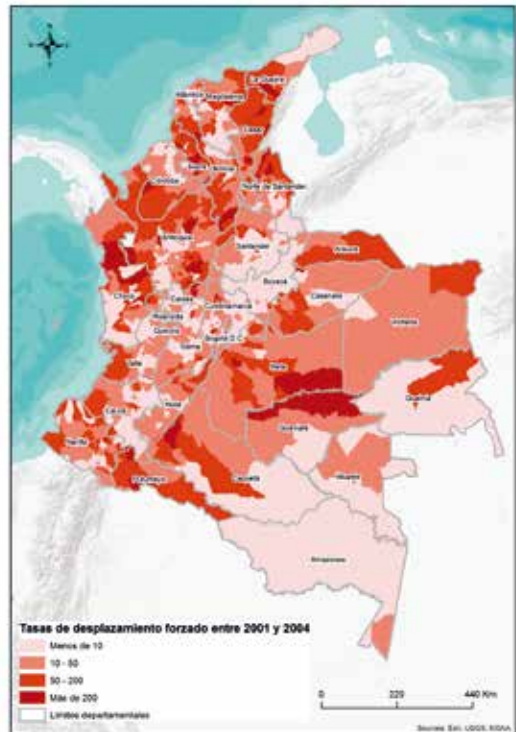
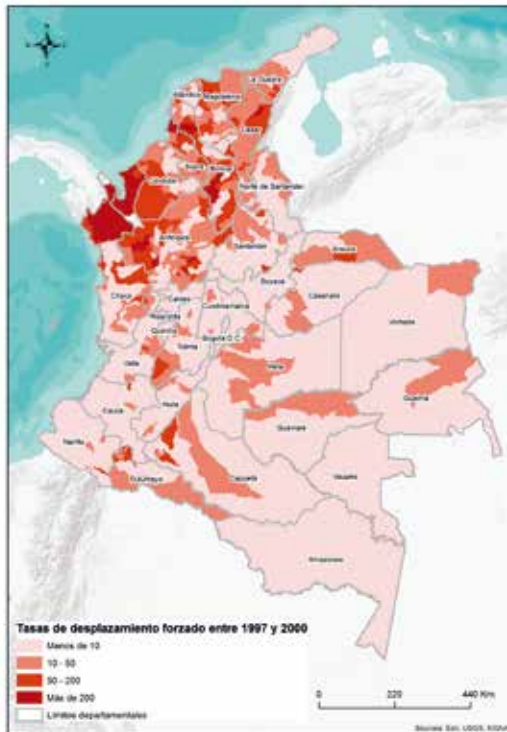
Mapa 1

**Colombia: evolución de las tasas de desplazamiento,
por cuatrienios, 1997-2011**

(En número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)

A. 1997-2000

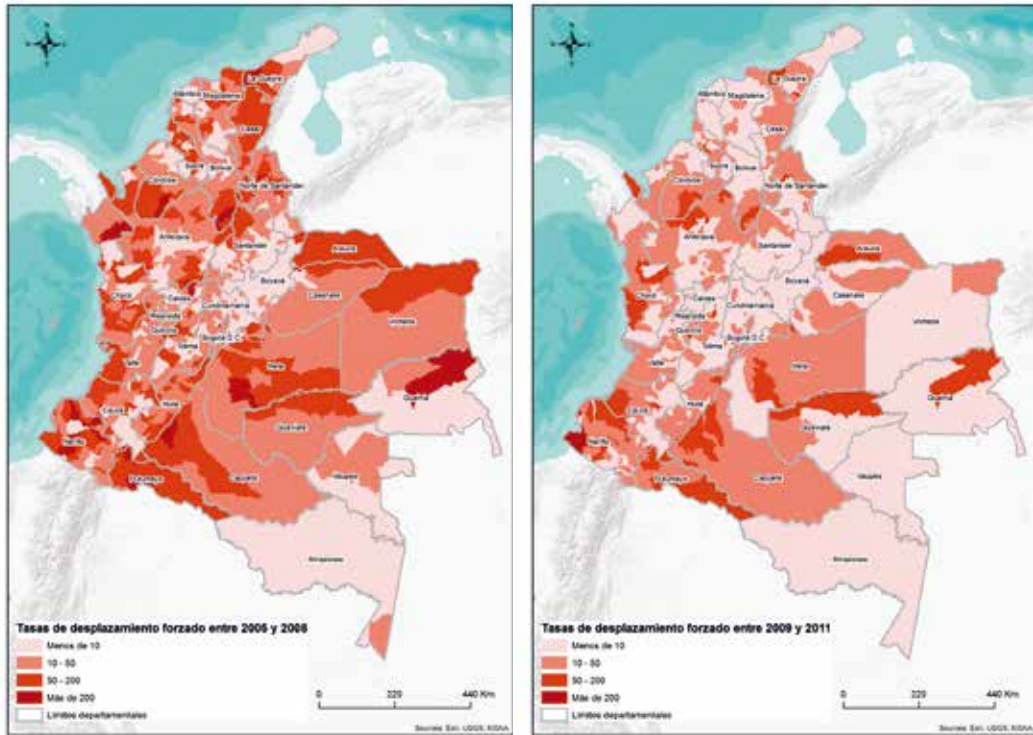
B. 2001-2004



Mapa 1 (conclusión)

C. 2005-2008

D. 2009-2011

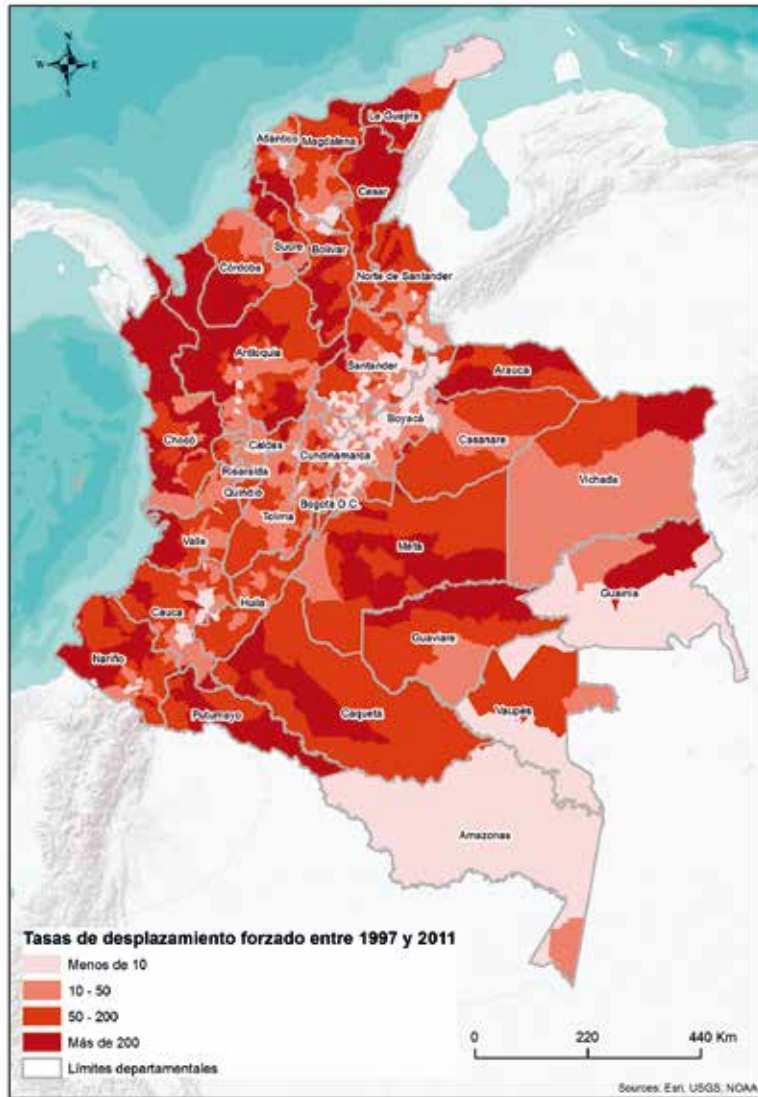


Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

Al consolidar el proceso de desplazamiento y construir las tasas generales relativas al período estudiado, se obtiene un mapa del país que refleja la condición de despojo y destierro a que fue sometida la población durante 15 años, en particular la población rural. Se observa también que las áreas de mayor impacto configuran regiones y corredores estratégicos ligados a las zonas de mayor riqueza en recursos naturales, regiones fronterizas y territorios de gran importancia geopolítica en el interior del país, como la región del Magdalena Medio y el sur de Bolívar (véase el mapa 2).

Al correlacionar espacialmente los mapas con las tasas municipales de desplazamiento forzado en el periodo 1997-2011 con las superficies entregadas en concesión para la explotación de diferentes productos minerales e hidrocarburos (véanse los mapas 3, 4 y 5) se observa que las relaciones más directas se dan entre las zonas de mayor expulsión y las áreas otorgadas para la extracción de oro y otros minerales metálicos. Aunque la correlación no es tan ubicua con respecto al carbón y los hidrocarburos, sí existe en determinados enclaves del país: el Magdalena Medio, la costa atlántica y algunos municipios de la Orinoquía en el caso del petróleo, y la Guajira y el Cesar en el caso del carbón.

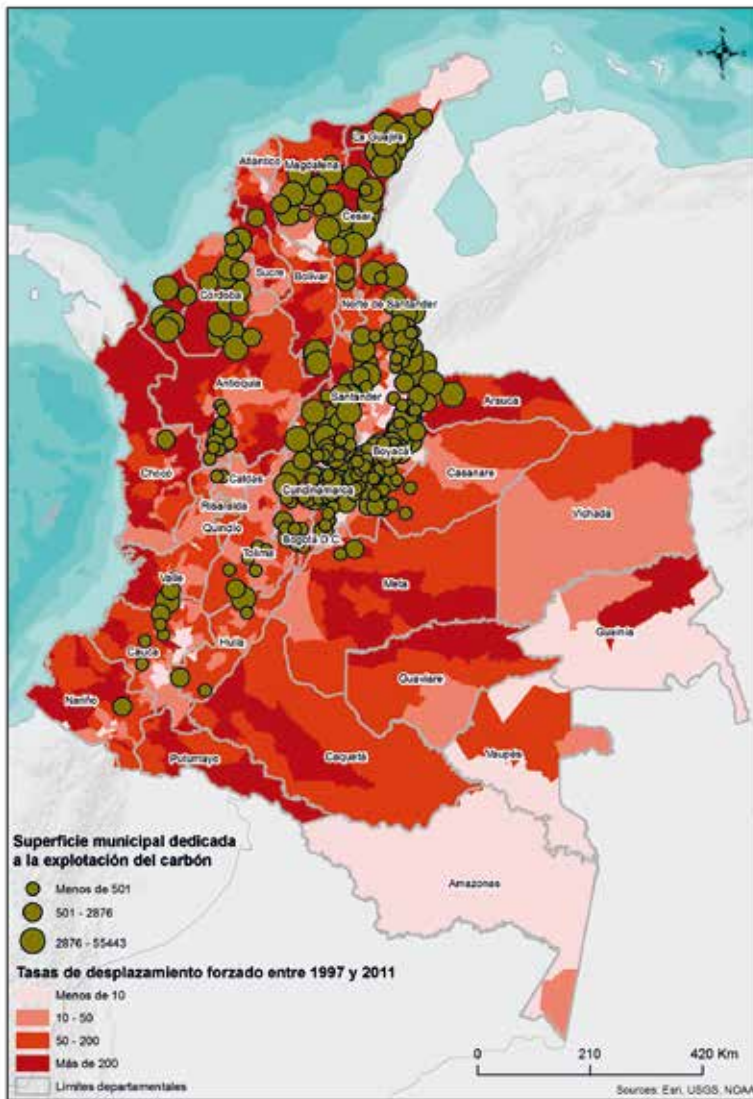
Mapa 2
Colombia: tasas consolidadas de desplazamiento, 1997-2011
(En número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

Mapa 3

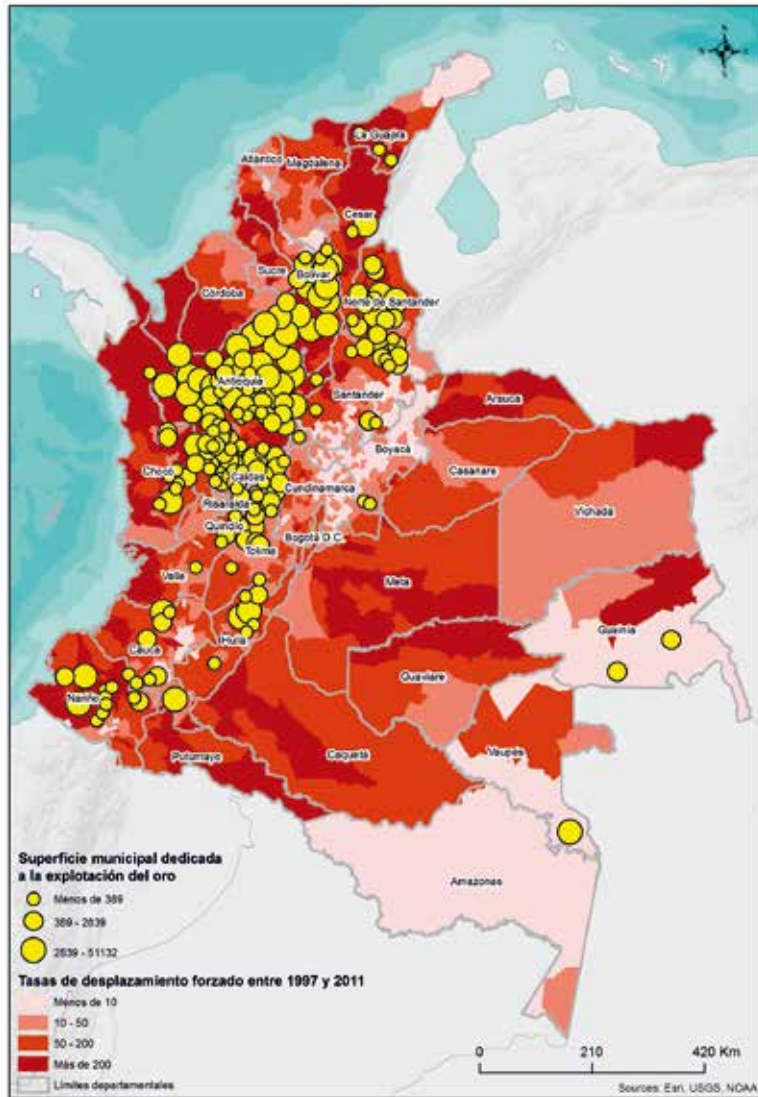
Colombia: ocupación del territorio con títulos y explotaciones de carbón y municipios de mayor expulsión por desplazamiento forzado, 1997-2011
(En hectáreas y número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

Mapa 4

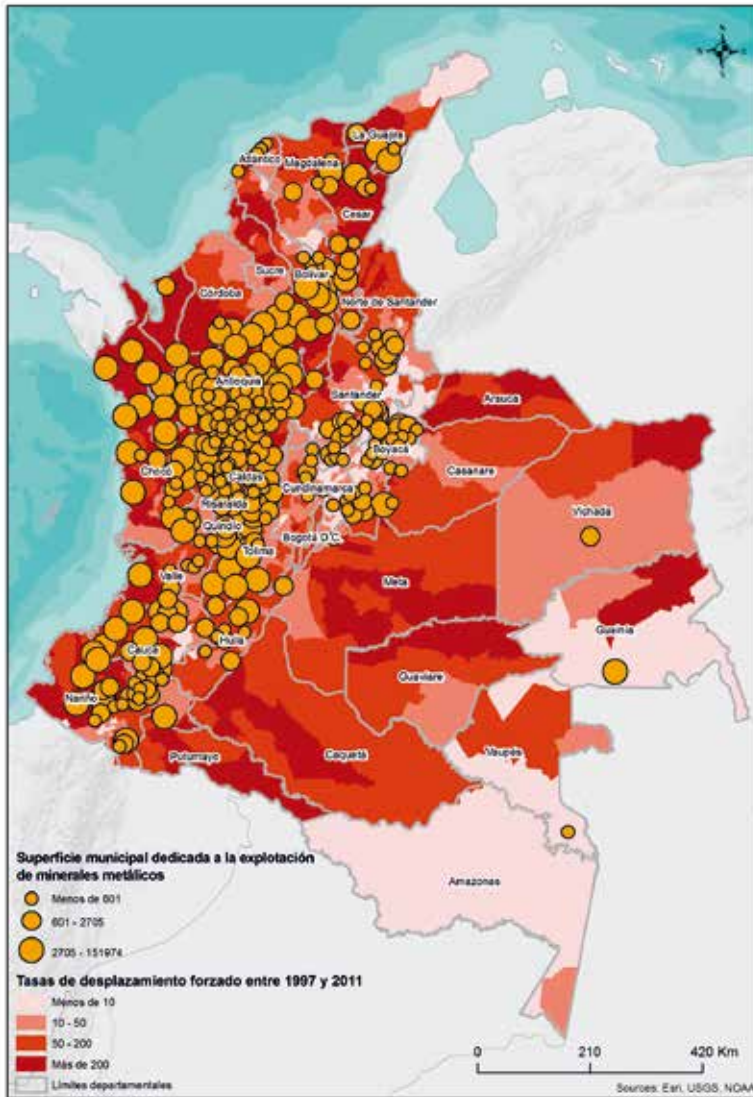
Colombia: ocupación del territorio con títulos y explotaciones de oro y municipios de mayor expulsión por desplazamiento forzrado, 1997-2011
 (En hectáreas y número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

Mapa 5

Colombia: ocupación del territorio con títulos y explotaciones de minerales metálicos y municipios de mayor expulsión por desplazamiento forzado, 1997-2011
(En hectáreas y número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

Al establecer la correlación entre el territorio destinado a la explotación carbonífera y las tasas de desplazamiento forzado en las regiones que se dibujan en el mapa 3, se observa una importante correlación entre estas dos variables en territorios del centro del país: la subregión de Arauca, Boyacá y Santander presenta una altísima correlación, seguida por Casanare, que es un territorio aledaño (véase el cuadro 2).

Cuadro 2
Colombia: correlaciones entre variables seleccionadas
en las subregiones productoras de carbón

Subregión productora de carbón	Entre la tasa de desplazamiento forzado y el área del municipio dedicada a la explotación minero-energética	Entre la tasa de desplazamiento forzado y el coeficiente de Gini	Entre el coeficiente de Gini y el área del municipio dedicada a la explotación de carbón	Entre el coeficiente de Gini y el área del municipio despojada a sus propietarios	Entre la tasa de desplazamiento forzado y el área del municipio despojada a sus propietarios
Caribe	0,012	0,021	0,098	0,007	0,103
Frontera con Venezuela (República Bolivariana de)	0,120	0,231	0,129	0,186	0,409
Urabá	0,248	0,123	0,017	0,052	0,253
Sur Occidente	0,013	0,046	0,015	0,050	0,158
Casanare, Boyacá	0,743	0,197	0,317	0,385	0,001
Magdalena Medio	0,037	0,706	0,154	0,064	0,010
Cundinamarca, Meta	0,005	0,001	0,001	0,001	0,228
Antioquia, Risaralda, Chocó	0,140	0,326	0,464	0,061	0,610

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

El análisis de las relaciones que se establecen entre la explotación de oro, entendida como el número de títulos vigentes, y la dimensión del desplazamiento forzado, definido por las tasas totales, revela la existencia de subregiones que concentran municipios y conforman territorios unificados a partir de la expropiación, el desplazamiento y la minería. En el cuadro 3 se presenta el coeficiente de correlación en cada una de las subregiones emergentes, entre las que se destacan el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño.

Las correlaciones más altas entre la explotación de minerales metálicos (con excepción del oro) y no metálicos y el desplazamiento forzado se encuentran en las costas atlántica y pacífica, los territorios de la cordillera central. La correlación más significativa se encuentra en la zona de la Guajira y los territorios del Chocó y el nordeste antioqueño (véase el cuadro 4).

Si a las correlaciones espaciales entre el desplazamiento forzado y las superficies concedidas mediante títulos mineros y bloques petroleros se añade una tercera variable, el coeficiente de Gini de tierras, es posible obtener un mapa aún más detallado de la acumulación por desposesión en los espacios rurales de Colombia.

Cuadro 3
**Colombia: correlaciones entre variables seleccionadas
 en las subregiones productoras de oro**

Subregión productora de oro	Entre la tasa de desplazamiento forzado y el área del municipio dedicada a la explotación minero-energética	Entre la tasa de desplazamiento forzado y el coeficiente de Gini	Entre el coeficiente de Gini y el área del municipio dedicada a la explotación de oro	Entre el coeficiente de Gini y el área del municipio despojada a sus propietarios	Entre la tasa de desplazamiento forzado y el área del municipio despojada a sus propietarios
Guajira, Norte de Cesar	0,258	0,238	-0,068	0,888	0,028
Cesar	0,485	0,712	0,320	0,981	0,515
Nororiente, norte de Santander y Santander	0,043	0,145	0,089	0,005	0,000
Sur de Bolívar	0,280	0,458	0,227	0,000	0,000
Oriente antioqueño	0,005	0,000	0,121	0,007	0,245
Noroeste Chocó, oeste antioqueño y Risaralda	0,004	0,000	0,051	0,003	0,223
Norte del Tolima y Quindío	0,164	0,148	0,074	0,000	0,018
Huila y sur del Tolima	0,003	0,018	0,011	0,004	0,079
Cauca	0,521	0,515	0,351	0,762	0,084
Nariño	0,000	0,008	0,011	0,191	0,267

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

Cuadro 4
**Colombia: correlaciones entre variables seleccionadas
 en las subregiones productoras de metales**

Subregión productora de metales (metálicos distintos al oro y no metálicos)	Entre la tasa de desplazamiento forzado y el área del municipio dedicada a la explotación minero-energética	Entre la tasa de desplazamiento forzado y el coeficiente de Gini	Entre el coeficiente de Gini y el área del municipio dedicada a la explotación de metales	Entre el coeficiente de Gini y el área del municipio despojada a sus propietarios	Entre la tasa de desplazamiento forzado y el área del municipio despojada a sus propietarios
Noroeste: Chocó, Antioquia, Risaralda	0,122	0,003	0,022	0,000	0,084
Oriente antioqueño	0,009	0,000	0,231	0,008	0,276
Sur de Bolívar	0,042	0,189	0,094	0,014	0,008
Litoral atlántico norte	0,171	0,005	0,019	0,066	0,011
Litoral atlántico centro	0,040	0,454	0,344	0,006	0,409
Sudoeste: Valle, Cauca, Nariño, Putumayo	0,003	0,029	0,038	0,089	0,079
Huila	0,066	0,024	0,000	0,010	0,056
Santander	0,074	0,114	0,073	0,353	0,141
Cordillera oriental	0,002	0,069	0,000	0,199	0,342

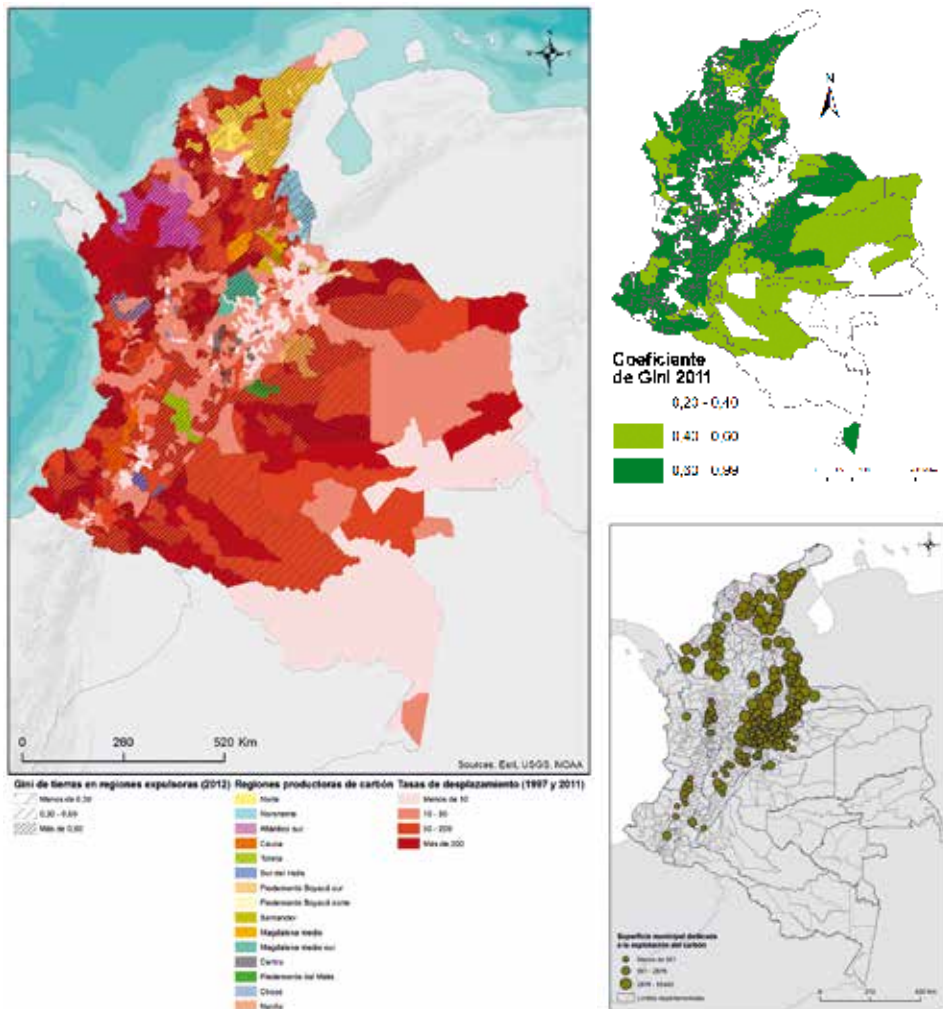
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

En el mapa 6 se evidencia que este último indicador es sumamente elevado en casi todas las regiones que presentan altos niveles desplazamiento y concesiones para la explotación de carbón. Si bien es una de las mayores zonas del país dedicadas a la explotación del carbón,

la región andina (Boyacá, Cundinamarca) no presenta un alto indicador de desplazamiento, algo que sin embargo ocurre en la zona del Caribe y el centro del país.

Mapa 6
Colombia: subregiones de explotación de carbón y altos niveles de desplazamiento forzado, 1997-2011

(Coeficiente de Gini, hectáreas y número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)



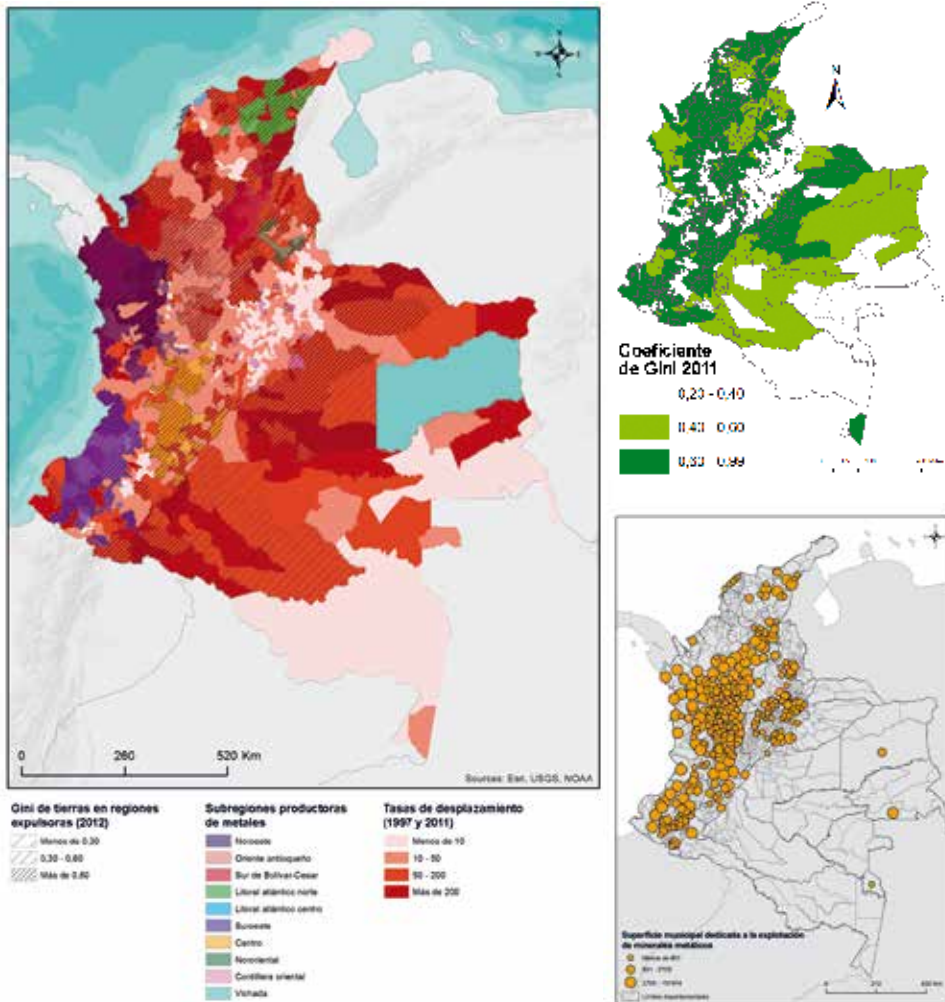
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

En el mapa 7 se identifican 10 subregiones productoras de metales distintos del oro, que se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional. Se observan bloques de explotación intensiva en departamentos como Chocó, el centro del país, la costa del Caribe y el área sudoccidental, regiones que también presentan altas tasas de desplazamiento forzado.

Mapa 7

Colombia: subregiones de explotación de metales y altos niveles de desplazamiento forzado, 1997-2011

(Coeficiente de Gini, hectáreas y número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)



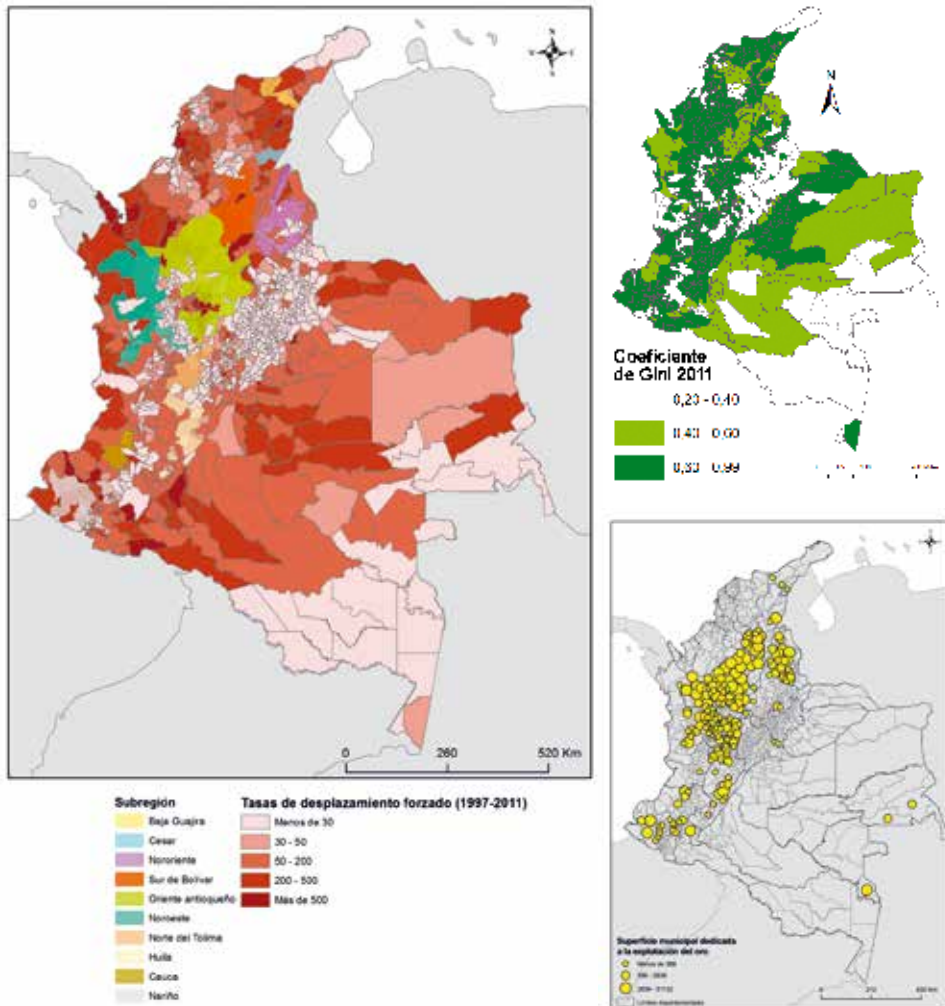
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

Las subregiones se constituyen mediante parámetros geográficos, sociales y económicos y se basan en las características y problemáticas similares que esas zonas comparten. En el mapa 7 se indican los índices de Gini de propiedad rural y la ubicación de las explotaciones mineras en territorios de alta concentración de la propiedad rural y se muestra el total de los títulos de explotación de metales en el país.

La explotación del oro es una de las actividades mineras que mayor correlación presenta con el desplazamiento forzado en la geografía nacional (véase el mapa 8). La región de la cordillera central y el centro del país concentra el mayor volumen de títulos mineros y es a su vez una de las regiones de mayor concentración de la propiedad de la tierra rural productiva.

Mapa 8
Colombia: subregiones de explotación de oro y altos niveles de desplazamiento forzado, 1997-2011

(Coeficiente de Gini, hectáreas y número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

D. A modo de conclusión parcial

Para concluir el análisis se identificaron los municipios en los que se realiza simultáneamente la explotación de oro, carbón y otros metales y se registran altos niveles de desplazamiento forzado. Tanto el desplazamiento como la explotación minero-energética rompen las fronteras político-administrativas de los territorios y configuran conglomerados de municipios que a su vez deben considerarse como regiones particulares, que tienen elementos comunes desde el punto de vista de las condiciones económicas, sociales, territoriales y particularmente del ejercicio de la violencia y la acumulación de tierras en el país.

La regionalización que muestra el mapa 9 es el resultado de un ejercicio de análisis a nivel de municipios que, sobre la base del Sistema de Información Geográfica, permitió visibilizar los conglomerados de municipios que a su vez conforman regiones. Existen municipios en los cuales se realiza la explotación minero-energética de más de un mineral y, de hecho, los títulos mineros prevén la explotación de todos los minerales que allí se hallen. Junto a los yacimientos de oro casi siempre existen yacimientos de platino, cobre y otros minerales que forman parte de la composición geológica de los suelos, en particular los andinos. Teniendo en cuenta esta condición, se realizó el ejercicio de constituir regiones e identificar en ellas los territorios, las riquezas, las violencias, las empresas explotadoras y los conflictos que allí se generan alrededor de la explotación minero-energética.

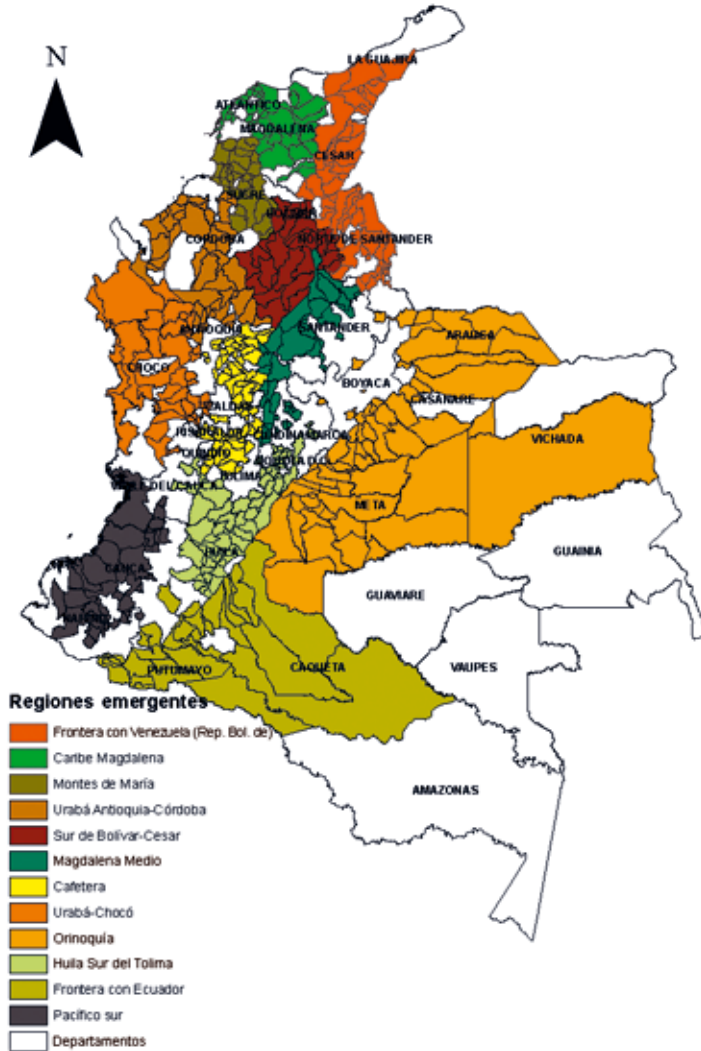
Se identificaron 12 regiones distribuidas en todo el país y se determinaron los municipios que las conforman, los recursos que allí se explotan y las correlaciones que se establecen al cruzar las tres variables analizadas —expulsores de población, productores minero-energéticos y coeficiente de Gini de acumulación de tierras.

Es importante resaltar el carácter exploratorio del presente trabajo y los aportes que se hacen al proceso de análisis espacial de un problema eminentemente socioeconómico. La metodología utilizada permitió explorar nuevas y novedosas aproximaciones que integran de manera eficaz las lecturas interdisciplinarias de un problema actual y poco analizado en Colombia como la investigación de las repercusiones territoriales y sociales que tiene para el país la implantación del modelo extractivista como fundamento económico.

Al visualizar en el mapa las regiones emergentes, se aprecia la relación entre la geografía colombiana y la dinámica de los fenómenos sociales y económicos en el país. Se puede observar que las cordilleras y los valles interandinos se convierten en barreras o corredores de conectividad que determinan que los municipios compartan dinámicas y procesos de violencia similares. Se distinguen claramente los espacios de frontera que han sido territorios en disputa y se identifican las subregiones del Magdalena Medio y el sur de Bolívar toda vez que son escenarios de guerra y conflicto, en los cuales se expone a la población a múltiples violencias.

Se configuran corredores de mutua influencia que atraviesan el país de sur a norte y de oriente a occidente. Es interesante señalar que la zona del altiplano cundiboyacense y algunos municipios de Santander quedan fuera del análisis pues no presentan en su territorio las tres variables a la vez.

Mapa 9
Colombia: grandes regiones emergentes, 1997-2001



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

La aglomeración de los municipios que conforman las regiones se hizo teniendo en cuenta la proximidad geográfica y el grupo que se forma al aparecer entre cada región espacios en blanco o fronteras naturales (ríos, cordilleras, grandes sabanas). Esto muestra relaciones de mutua influencia en las que factores contextuales, como las condiciones económicas, sociales y políticas, configuran relaciones compartidas que unifican a estos municipios como regiones.

Los resultados presentados son el punto de partida para el análisis regional que da continuidad a esta investigación sobre la minería y el desplazamiento forzado en Colombia. En la etapa siguiente se analizan las particularidades sociales, económicas y políticas que acompañan la actividad de exploración y explotación minero-energética en las regiones identificadas como de mayor correlación respecto de cada uno de los elementos analizados. En general se trata de las regiones del país donde se registran altos niveles de desplazamiento forzado y una intensa actividad minera. Se cierra el foco de observación e indagación y, trabajando de manera detallada sobre las 12 regiones identificadas, se examinan y ponen en evidencia las relaciones entre el desplazamiento, la explotación minero-energética y la acumulación por desposesión en el país en los últimos 20 años. Este tema se desarrolla en profundidad en el texto completo del trabajo de investigación que se publicará próximamente.

Bibliografía

- Banco de la República (2014), “Deuda externa en Colombia. Boletín trimestral”, Bogotá, Subgerencia de Estudios Económicos, Sección de Sector Externo, enero [en línea] http://www.banrep.org/informes-economicos/ine_bol_deuex.htm.
- Bello, M. (2006), “El desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital y exclusión social”, *Colombia: migraciones, transnacionalismo y desplazamiento*, G. Ardila (ed.), Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- Fajardo, D. (2002), “Migraciones internas, desplazamientos forzados y estructuras regionales”, *Revista Palimpsesto*, N° 2.
- González Posso, C. (2013), “La verdad de la Tierra: más de ocho millones de hectáreas abandonadas”, *Razón Pública* [en línea] <http://www.razonpublica.com/>.
- Harvey, D. (2012), *El enigma del capital y las crisis del capitalismo*, Madrid, Akal.
- (2011), *O neoliberalismo, historia e implicacoes*, São Paulo, Edicoes Loyola, segunda edición.
- (2006), *Spaces of Global Capitalism. Towards a Theory of Uneven Development*, Nueva York, Verso.
- (1992), *Los límites del capitalismo y la teoría marxista*, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.
- IGAC/CORPOICA (Instituto Geográfico Agustín Codazzi/Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria) (2002), *Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia*, Bogotá.
- Kalmanovitz, S. (2008), “Consecuencias económicas de la independencia en Colombia”, *Revista de Economía Institucional*, vol. 10, N° 19, Bogotá.
- Lefebvre, H. (1976), *The Survival of Capitalism: Reproduction of the Relations of Production*, Nueva York, St Martin's Press.
- Martínez Ortiz A. y J. A. Ocampo (2011), *Hacia una política industrial de nueva generación para Colombia*, Bogotá, Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana.
- Marx, K. (1976) [1867], *El capital*, tomo I, Bogotá, Fondo de Cultura Económica.
- Molano, A. (1996), “Desplazados y problema agrario”, ponencia presentada en el Octavo Foro Nacional Paz, Democracia, Justicia y Desarrollo, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Bogotá, 11 a 13 de julio.
- Robledo, J. E. (2007), “La globalización neoliberal niega la democracia”, *Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía*, G. Hoyos Vásquez, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

- Rodríguez, D. y E. Cepeda (2011), “Concentración de la tierra en Colombia”, *Comunicaciones en Estadística*, vol. 4, N° 1, Universidad Santo Tomás, junio.
- Ruiz, N. (2013), *El desplazamiento forzado en Colombia. Población, territorio y violencia*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- (2004), “Desplazamiento forzado en Colombia 2000-2004. Aportes teóricos, análisis demográfico y territorial”, *Desplazamiento, movilidad y retorno en Colombia. Dinámicas migratorias recientes*, N. Ruiz y otros (eds.), Bogotá, Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS), Universidad Externado de Colombia.
- Salcedo, A. (2006), “Políticas de la movilidad y la diferencia: migraciones y desplazamiento”, *Colombia: migraciones, transnacionalismo y desplazamiento*, G. Ardila (ed.), Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- Smith, N. (2008), *Uneven Development. Nature, Capital and the Production of Space*, Athens, Georgia University Press, tercera edición.
- Toro, C. y otros (coords.) (2013), *Minería, territorio y conflicto en Colombia*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), Foreign Agricultural Service [en línea] <http://www.fas.usda.gov/gats/default.aspx>.